

INTRODUCCIÓN AL NÚMERO 2

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN: DISCURSOS SUPRANACIONALES VERSUS MATERIALIZACIONES NACIONALES

El acceso a la educación de todas/os ha ocupado un lugar prioritario y persistente en la agenda de numerosas instituciones supranacionales desde hace más de medio siglo. Ya el artículo 26 de la *Declaración Universal de Derechos Humanos* estableció que “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental”. Posteriormente, la *Convención sobre los Derechos del Niño* en sus artículos 28 y 29 vino a especificar este derecho con respecto a un sujeto en particular, al declarar que “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;”

Desde entonces, y con la perspectiva que nos ofrecen nuestros días, no sería excesivo considerar el derecho a la educación una de las políticas educativas supranacionales más claramente visibles en las últimas décadas. Lo demuestran eventos como la *Conferencia de Jomtiem (UNESCO, 1990)* y su *Declaración Mundial sobre Educación para Todos*, a partir de la cual se han diseñado estrategias internacionales y acciones nacionales para extender este derecho todo lo posible.

Los procesos de internacionalización del derecho y de constitucionalización del derecho han contribuido a ubicar en una posición privilegiada a la educación también dentro de las agendas estatales. Si bien este reconocimiento internacional y estatal es un terreno ganado, queda por ver en qué medida y con qué ritmo es provisto ese derecho, a la par que resulta necesario trazar un mapa comparativo que nos permita saber qué grado de materialización alcanza el derecho a la educación en cada país, en cada región y a nivel local porque desde luego las desigualdades al interior de los Estados no suelen ser grandes en materia de reconocimiento pero sí de materializaciones.

En el primer artículo, titulado “El derecho a la educación como derecho fundamental y sus alcances en el derecho internacional de los derechos humanos”, Sebastián Scioscioli caracteriza la educación como derecho fundamental, lo cual implica que los Estados deben cumplir obligaciones concretas cuyo incumplimiento o cumplimiento deficiente los lleva a incurrir en responsabilidad internacional. El “piso mínimo” al que están obligados los Estados se eleva considerablemente y exige un gran despliegue de políticas públicas que exceden ampliamente la anterior concepción, que consideraba la educación un servicio que los Estados debían prestar a un público al que se presumía igual en términos formales.

El siguiente trabajo, “El derecho a la educación de las personas migrantes y refugiadas”, de Vernor Muñoz Villalobos, plantea en toda su complejidad tanto el reconocimiento como la provisión del derecho a la educación de las personas migrantes y refugiadas y nos brinda una serie de recomendaciones que incluyen la protección de la diversidad cultural y lingüística y la ampliación de la cobertura a todos los niveles educativos para estas poblaciones migrantes y refugiadas. Este caso es importante porque está relacionado con las exclusiones que las fronteras representan y con las trayectorias vitales cruzadas por múltiples discriminaciones, entre las que el acceso a la educación y la igualdad de oportunidades educativas son centrales.

El texto “Los derechos de la infancia en el discurso de las políticas de educación y atención de la primera infancia”, de Ana Ancheta Arrabal, aborda desde una perspectiva supranacional los

derechos de la infancia en las políticas de educación y atención de la primera infancia, planteando los límites que las ideologías de base economicista presentan en el tratamiento de estos derechos por cuanto siguen fundamentándolos en la potencialidad futura, en un futuro sujeto de derechos humanos en lugar de partir de los derechos humanos de los niños que son sujetos actuales de derechos.

En el artículo “El derecho a la educación y la educación para la diversidad: el caso de las escuelas y aulas hospitalarias en Europa”, Antonio García Álvarez y Guillermo Ruiz, interrogan los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos desde un caso que en sus particularidades deja ver los alcances y límites de esos derechos: el caso del desarrollo de escuelas y aulas hospitalarias en el contexto europeo. Este derecho, que ha sido reconocido y parcialmente provisto con respecto a niños exclusivamente, es exhaustivamente caracterizado y delimitado.

En “El derecho a la educación en Centroamérica: un análisis a partir de la disponibilidad y la accesibilidad de la gramática de la educación”, Marco Vinicio Méndez Coto, marca la gran distancia que en Centroamérica se puede percibir entre la positivización de derechos y los compromisos internacionales que los Estados han asumido en materia educativa y su materialización. Esa insuficiente efectivización del derecho humano a la educación redundaría por supuesto en la exclusión de una importante parte de la población, que puede atenuarse si se sustituyen los criterios económicos en el acceso a la educación por principios de igualdad social que conllevan una educación obligatoria, gratuita y universal.

El trabajo “Corrientes internacionales, desarrollos estructurales, preferencias nacionales y la implementación de políticas educativas: hallazgos en El Salvador durante el periodo 1990-2005”, de Brent Edwards Jr., Julián Antonio Victoria Libreros y Pauline Martin, se aboca al análisis de tres procesos de implementación de políticas educativas en El Salvador, enfatizando los factores que fomentan o impiden alcanzar los fines de tales políticas. El análisis de la influencia de los factores y actores internacionales e internos sobre las trayectorias de estos tres casos da lugar a una anticipación de posibles niveles de implementación de una política educativa.

Por último, el artículo “La influencia (¿insuficiente?) del Derecho internacional en el derecho a la educación: una mirada de las condiciones de gratuidad y laicidad desde el principio de igualdad” (Liliana Ronconi) aborda los principios de gratuidad y laicidad que rigen en la educación básica desde una concepción de la igualdad como no sometimiento. Si bien estos principios tienen pleno reconocimiento jurídico, el estudio de casos jurisprudenciales argentinos da cuenta de los límites que plantean su efectivización y el desafío que implicaría su aplicación estricta en orden a la limitación de otros derechos.

Las reflexiones teóricas y los datos empíricos comprendidos en este volumen nos permiten reafirmar que, si bien estamos lejos aún de alcanzar los objetivos propuestos en relación al conocido enfoque de las cuatro o cinco A de Karina Tomasevski, es vasta y muy variada la actividad desplegada por los Estados en torno a esas dimensiones y que son profundas las vacancias en el plano del reconocimiento y, sobre todo, en el de la materialización de un derecho de cuya validez y eficacia depende el futuro que construiremos. En esa construcción, el campo de la investigación en educación da cuenta de un alto nivel de reflexión y generación de teoría así como de producción y análisis de datos. Entendemos que eso queda sobradamente reflejado en este volumen.

Nancy Cardinaux
Coordinadora del monográfico